

Lo decadente contra lo emergente

Por Lorenzo Meyer

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Cuando una institución o forma establecida de hacer las cosas entra en una etapa de deterioro y descomposición, es común que los intereses que se han beneficiado con el arreglo que está por concluir, intenten prolongar al máximo el periodo de decadencia. Y una forma de lograr lo anterior es impedir que surjan o arraiguen las alternativas. Justamente ésa es una de las líneas de defensa que ha decidido seguir el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su afán de posponer el momento en que México sea parte de los sistemas políticos transformados por la ola democratizadora que se inició hace 25 años en el sur de Europa. Socavar la credibilidad del Instituto Federal Electoral (IFE) es, desde la perspectiva priista, una forma de debilitar una de las palancas con que la sociedad mexicana pretende quitar del paso algunos de los enormes obstáculos históricos que aún le impiden transitar por los anchos caminos de la modernidad.

La defensa a ultranza -desesperada- que hace el PRI de lo que ya es un orden caduco y disfuncional, es una de las características centrales del proceso político mexicano de los últimos tres lustros. Y parte de esa defensa es el ataque que el partido oficial decidió emprender desde fines del año pasado contra la institución insignia de la posible modernidad democrática mexicana: el IFE. Hoy por hoy, ese instituto electoral es pieza fundamental e insustituible para quienes buscan hacer coincidir el inicio del siglo XXI mexicano con la inauguración de un nuevo régimen político. Por tanto, corroer la efectividad de la autoridad electoral, deslegitimarla de manera tramposa, es una forma de intentar prolongar la agonía de un arreglo político que opera en contra del interés general pero a favor de un buen número de intereses particulares a los que el monopolio político establecido por la Revolución Mexicana les ha significado un negocio tan redondo como los muchos ceros que tie-

nen las cifras con que el Fobaproa aumentó la deuda pública. Ahora bien, alargar con artimañas el ya de por sí largo e insano dominio del viejo partido de Estado es, finalmente, jugar con fuego, pues si no es por la vía de elecciones equitativas y sin trampas -y el IFE es hoy casi la única garantía institucional de ello-, entonces ¿qué camino les queda a las fuerzas y actores que desean modificar el actual estado de cosas en México?

Es obvio que la democracia política es mucho más que elecciones periódicas, libres y con resultados creíbles y aceptados por el grueso de los ciudadanos, pero es igualmente claro que ese procedimiento de consulta a la sociedad constituye el paso inicial e insustituible de un régimen democrático, paso que en México aún no hemos podido dar. En nuestro país, los procesos electorales han sido manipulados de manera descarada por las élites dirigentes a lo largo de casi dos siglos de vida independiente, y por tanto la sociedad ha acumulado una profunda y comprensible desconfianza en relación a uno de los procedimientos fundamentales para darle expresión concreta al concepto de soberanía del pueblo. En términos generales, en México las elecciones han sido la negación de esa soberanía, un ejercicio formal vacío de contenido. Con Santa Anna, el proceso electoral

El IFE es pieza fundamental e insustituible para quienes buscan hacer coincidir el inicio del siglo XXI, mexicano con la inauguración de un nuevo régimen político. Por tanto, corroer la efectividad de la autoridad electoral deslegitimarla de manera tramposa, es una forma de intentar prolongar la agonía de un arreglo Político que opera en contra del interés general.

Lorenzo Meyer.

Colaborador del periódico *Reforma*.



Es obvio que la democracia política es mucho más que elecciones periódicas, libres y con resultados creíbles y aceptados por el grueso de los ciudadanos, pero es igualmente claro que ese procedimiento de consulta a la sociedad constituye el paso inicial e insustituible de un régimen democrático, paso que en México aún no hemos podido dar.

ya era una farsa y, desde luego, el voto no era ni libre ni secreto; las cosas no mejoraron con su caída. El triunfo final de los liberales no modificó en nada la costumbre ya bien establecida de obligar a las urnas a decir exactamente lo que deseaba que dijeran quien tenía el poder. Al iniciarse el siglo XX, la ineffectividad del sufragio fue la razón que esgrimieron los enemigos del Porfiriato para condenarlo, pero quienes sustituyeron a los porfiristas terminaron por comportarse como ellos, aunque usando métodos un poco más refinados gracias a la creación de un partido de masas y de Estado: el PNR-PRM-PRI.

EL IFE COMO AVE FÉNIX

Desde el origen del régimen actual, e incluso en situaciones tan difíciles como las elecciones federales de 1940, las de 1952 o las de 1988, la legislación electoral y la realidad política habían dado al gobierno y a su partido la posibilidad de controlar los resultados que arrojaban las urnas. En un sistema de partido de Estado y sin división de poderes, lo natural era una situación donde el juez (el gobierno, vía la Secretaría de Gobernación) y la parte (el PNR-PRM-PRI) eran una y la misma cosa. La reforma constitucional de 1989 -forzada por la existencia de una oposición masiva y su movilización ante la «caída del sistema» de cómputo electoral en julio de 1988- creó al IFE, que entró en funciones en octubre de 1990. Los dos primeros responsables del nuevo instituto, Emilio Chuayffet Chemor y Arturo Núñez, no tenían ni el deseo ni las posibilidades de guardar distancia frente al secretario de Gobernación o frente al PRI; todo el aparato burocrático del IFE —uno que hoy cuenta con representación en las 32 entidades federativas y subdelegaciones en los 300 distritos electorales uninominales— no era más que un añadido a la estructura de Gobernación. Nació pues, el IFE, como un capítulo nuevo de una historia vieja y su objetivo no era otro que modificar las formas sin cambiar los contenidos.

Para obligar al Presidente a empezar a desligar en verdad al juez electoral (el IFE original) de la parte (el PRI), se requirió de otra crisis: la que se desarrolló a lo largo del último año del sexenio presidido por Carlos Salinas y que incluyó el levantamiento, indígena en Chiapas, los asesinatos del candidato oficial a la Presidencia y del secretario del PRI después, aunada a la presión de los partidos de oposi-

ción y a la exigencia externa de no volver a repetir la experiencia del 88. Es verdad que el grueso del personal del aparato montado por la mancuerna Chuayffet-Núñez en el IFE siguió en su sitio, pero el poder de decisión en la cumbre de esa pirámide se depositó en un grupo nuevo e inesperado: formado por unos «consejeros ciudadanos» que no estaban ligados a ningún partido y con buena fama pública.

El IFE de 1994 tuvo una enorme importancia no porque finalmente lograra que en México hubiera elecciones sin tacha -después de todo, su burocracia era la del «antiguo régimen»-, sino por las posibilidades que abrió de cara al futuro. Y el futuro llegó en 1996, cuando una nueva reforma electoral desligó definitivamente al IFE del Poder Ejecutivo, dio el voto dentro de los órganos de dirección exclusivamente a ocho consejeros electorales y a su presidente, y abrió la posibilidad de hacer de todo el personal de la institución miembros de un Servicio Profesional Electoral (SPE); es decir, de desligar su futuro profesional de Gobernación y de los partidos. Como la elección federal fundamental no era la inmediata, la de 1997 (que por cierto, salió bien), sino la presidencial del 2000, el nuevo IFE ha tenido tiempo y oportunidad para ir tirando algo del lastre dejado por las administraciones de los dos «distinguidos priistas» que le dirigieron en sus primeros años, aunque no todo. Esos cambios, acumulados, son los que hoy abren la posibilidad de unas elecciones más limpias y equitativas que las del pasado inmediato, pero son, también la razón de la irritación y el temor que muestran los aparatos del PRI respecto del IFE.

EL ATAQUE

Las crisis y las decisiones presidenciales que no la voluntad del PRI, son lo que ha permitido el surgimiento y desarrollo del IFE actual, pero en vísperas de su gran prueba -las elecciones del año próximo-, el viejo partido oficial ha decidido minar hasta donde le sea posible y por cualquier medio, la legitimidad del instituto electoral. El primer paso fue el retiro del PRI del IFE en 1998, cuando se propuso una investigación en torno a los enormes recursos que el PRI usó en 1994 para asegurar el triunfo de su candidato presidencial; como el efecto de la medida no fue el esperado, el PRI se reintegró al Consejo General del IFE pero

ahora para poder continuar el ataque desde adentro.

El contralor interno -una herencia del IFE original, de la época anterior a su independencia-, fue el instrumento elegido para asesnar un golpe al corazón mismo del instituto: la credibilidad y honorabilidad de sus consejeros o, más exactamente, de algunos de ellos, los que, según el PRI, se han caracterizado por «un acentuado antipriismo»: Jaime Cárdenas, Emilio Zebadúa y Jesús Cantú. Al final, se decidió centrar el ataque en lo que se evaluó como el eslabón más débil de esa cadena: en los frecuentes viajes de Cantú a Monterrey, su ciudad de residencia, y en los gastos de un seminario organizado por ese consejero en Jurica, Querétaro, en septiembre de 1997. Por ambos motivos, el contralor, por sí y ante sí, decidió cesar a Jesús Cantú e iniciar así una nueva etapa en la campaña del partido oficial contra el instituto electoral.

La magnitud del problema que la ofensiva del PRI le puede causar al IFE está por verse, pero bien podría ser mayor, aunque los apoyos políticos, sociales e institucionales con que ya cuenta el IFE aunados al desprestigio del atacante, bien le pueden permitir capear el temporal. En cualquier caso, las razones formales para cesar al consejero Cantú aducidas por un contralor que provenía de la administración de Patrocinio González Garrido en Chiapas son minúsculas. Veamos, el contralor acusó al consejero neoleonés de no haberse mostrado «austero» en la organización de un seminario sobre temas electorales pero que, formalmente, no fue responsabilidad del consejero sino de la Comisión de Organización Electoral. ¿Y cuál es la base de la afirmación de falta de austeridad?: que en una reunión de tres días a la que asistieron 385 personas y donde hubo 3,465 servicios de alimentos, se sirvieron, en promedio, durante comida y cena, 2.2 copas de alguna bebida alcohólica por persona, gasto que, en su momento, fue debidamente autorizado por el secretario ejecutivo del IFE (ver *Reforma*, 11 de agosto, 1998). ¿Y los 40 viajes a Monterrey?, el consejero Cantú no tiene su residencia en la capital y eso se sabía cuando se decidió nombrarlo como directivo de un organismo con sede en el Distrito Federal. Una disposición administrativa del Consejo General del IFE autorizó que se financiaran los traslados de los consejeros, directivos y representantes de los parti-

dos que no tenían residencia en la capital del país. Es más, uno de los acusadores de Cantú, Enrique Ibarra, representante del PRI ante el IFE y que reside en Guadalajara, tiene en su haber no 40 sino 67 pasajes aéreos financiados por la institución electoral entre 1996 y 1997 y no todos a su ciudad de residencia como Cantú, sino también a Cancún, Acapulco o Puerto Vallarta («Masiosare», *La Jomada*, 16 de mayo, 1999).

EN SUMA

La austeridad en el uso de los dineros públicos nunca ha sido una preocupación del PRI a lo largo de su historia, su verdadera preocupación ha sido la de impedir sistemáticamente y por 70 años el surgimiento de alternativas reales a su monopolio del poder.

El IFE es una institución muy cara, el año pasado su presupuesto sobrepasó los 3 mil millones de pesos y su capital social ascendió a más de mil millones de pesos. El IFE es, en verdad, un aparato que cuesta mucho dinero, pero la razón misma de la existencia de una burocracia permanente, de buena calidad y enorme, dedicada únicamente a vigilar los procesos electorales federales -los institutos estatales son otra historia- se encuentra en la desconfianza tan arraigada de la sociedad mexicana en relación a todos los resultados oficiales de cualquier votación. El responsable principal, por no decir único, de esa desconfianza monumental sobre la forma como hoy opera en nuestro país el instrumento inicial de la democracia, el voto, y de lo costoso que está saliendo crear la confianza, es justamente el que ahora se rasga las vestiduras frente a boletos de avión o 2.2 copas *per cápita* en comidas y cenas durante tres días: el PRI; ese PRI que gastó el equivalente a 70 millones de dólares sólo en las elecciones de Tabasco de 1994 y de los que se niega a rendir cuentas.

Cuando el PRI deje el poder y se inicie la alternancia, el IFE que conocemos ahora y que lleva a que las elecciones mexicanas sean de las más caras del mundo, dejará de ser necesario y el costo del proceso electoral se reducirá hasta igualarse al de cualquier país moderno. Ese es el verdadero ahorro que debemos de buscar, pero para que lleguemos a tenerlo, necesitamos que el IFE actual mantenga todo su poder, cierre sus flancos débiles -viajes, seminarios, etcétera- y se sobreponga a los ataques actuales y a los que seguramente están por venir.

